



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: JORGE HERNÁN VALLEJO AGUDELO  
Demandados: ACP COLPENSIONES; PROTECCIÓN S.A.; PORVENIR S.A., y COLFONDOS S.A.  
Radicado: 05001 31 05 014 2018 00158 01  
Sentencia: S-062

### **AUTO**

En atención a la escritura pública 885 del 28 de agosto de 2020 allegada al expediente, se le reconoce personería como apoderado judicial de PORVENIR S.A. al Dr. ALEJANDRO MIGUEL CASTELLANOS LÓPEZ, T.P. 115.849 del C. S. de la Judicatura.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., así como el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el día 4 de marzo de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

JORGE HERNÁN VALLEJO AGUDELO demandó a las entidades enunciadas, pretendiendo se DECLARE la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad realizado inicialmente a COLFONDOS S.A., lo que comprende los posteriores traslados a PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN S.A., para que, en consecuencia, se declare que permaneció afiliado sin solución de continuidad en el Régimen de Prima Media, ordenando el traslado a COLPENSIONES de la totalidad de cotizaciones realizadas junto con los rendimientos financieros, frutos, intereses, comisiones, sumas adicionales, etc., además de que se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 15 de enero de 1956; que en toda su vida laboral tiene 1613 semanas de cotización, de las cuales 661 fueron realizadas al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; que en el mes de junio de 1997 cuando laboraba en EGAL INGENIERÍA ELÉCTRICA, fue trasladado a COLFONDOS S.A. sin recibir información de ninguna clase; que en noviembre de 1998 se trasladó a la entonces AFP COLPATRIA, hoy PORVENIR S.A.; que en octubre de 1999 inició a laborar con ENECON LTDA y lo afiliaron a la AFP PROTECCIÓN S.A.; que en ninguna de esas afiliaciones recibió información acerca de las condiciones, requisitos, ventajas y desventajas de estar afiliado a un fondo de pensiones; y que una proyección de su mesada pensional realizada por PROTECCIÓN S.A. en septiembre de 2017, da cuenta de que en

esa entidad obtendría una mesada pensional de garantía de pensión mínima, mientras que en el RPM, sería de \$1 ' 128.996, lo que denota el grave perjuicio causado por la falta al deber de información.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLFONDOS S.A., acepta únicamente lo relacionado la fecha de nacimiento del demandante, indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de situaciones de terceros que no pueden ser negados o aceptados, advirtiéndole que en todo caso la asesoría que como entidad brinda a sus potenciales afiliados es completa, incluyendo lo relacionado con las ventajas y desventajas del RAIS con una comparación con el RPM. Se opone además a las pretensiones y como excepciones plantea las que denominó validez de la afiliación, cumplimiento de la obligación, prescripción, buena fe, compensación y pago.

PORVENIR S.A. acepta únicamente la afiliación del demandante a esa entidad, en tanto los demás hechos tienen que ver con terceros que solo frente a ellos se pueden constatar. Aclara eso sí, que en su momento la AFP COLPATRIA orientó al demandante en debida forma suministrándole una información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz respecto de las características del RAIS y sus diferencias con el RPM. Con base en esos mismos argumentos se opuso a las pretensiones de la demanda y como excepciones propone prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y enriquecimiento sin causa.

COLPENSIONES por su parte, acepta igualmente la fecha de nacimiento del demandante además de su afiliación a esa entidad, el total de cotizaciones que alcanzó a completar, el traslado al RAIS y los movimientos entre administradoras de ese régimen. Se opuso a las pretensiones en tanto no se demuestran las razones de hecho y de derecho para que hubiera podido acceder al traslado solicitado. Como

excepciones propuso nulidad de traslado del régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por activa, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Finalmente, PROTECCIÓN S.A. en su respuesta a la demanda admitió la fecha de nacimiento del demandante, las semanas cotizadas, la afiliación previa al ISS y el traslado al RAIS en el mes de noviembre de 1996, indicando que no le consta lo relacionado con otras entidades por no ser de su conocimiento. Explica que al demandante se le dio una asesoría integral y completa respecto de las características, ventajas y desventajas de ambos regímenes según el conocimiento técnico con que cuentan todos sus asesores. Se opuso a las pretensiones por tratarse de un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento y propuso como excepciones inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada y aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 4 de marzo de 2020, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación del demandante a COLFONDOS S.A. así como su posterior movilidad a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A., ordenando su regreso a COLPENSIONES sin solución de continuidad. Ordenó además a todas las entidades reintegrar todos los conceptos recibidos por administración durante el tiempo de afiliación del demandante a cada una de ellas, y a PROTECCIÓN trasladar el saldo total existente en la cuenta de ahorro individual. Finalmente impone costas a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1`000.000 a cargo de cada una de ellas.

## **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, PORVENIR S.A. interpuso recurso de apelación indicando que si se declara la ineficacia del traslado solicitada, las cosas vuelven a su estado inicial, por lo que su obligación será solamente el traslado de lo efectivamente cotizado por el demandante sobre el IBC reportado más los rendimientos financieros generados, toda vez que por mandato de ley (art 20 – ley 100/93), los conceptos de cuotas de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, entre otros descuentos, no se pueden manejar bajo la misma premisa lógica, toda vez que estos porcentajes tienen una destinación específica, tienen una prohibición legal expresa de que sean utilizadas para el pago de algún tipo de prestación económica, son utilizados en beneficio del afiliado, y durante el tiempo en que fueron administrados esos dineros, se ejecutó una administración de buena fe dando unos rendimientos que traen como consecuencia un mayor capital en la cuenta de ahorro individual del demandante.

PROTECCIÓN S.A. manifiesta que no es procedente que se ordene la devolución de lo descontado por comisión de administración, toda vez que se trata de conceptos causados y que fueron realizados conforme a la ley y como contraprestación a una buena gestión de administración como lo es legalmente permitido frente a cualquier entidad financiera. Agrega que se debe entender que, aunque se declare una ineficacia y se haga la ficción de que nunca existió el contrato, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras producto de la buena gestión, que se representa en la comisión de administración, la cual debe conservarse ya que efectivamente hizo rentar el patrimonio del afiliado.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES.

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión advirtiendo que el traslado realizado por el demandante al RAIS, se hizo de forma voluntaria y sin su injerencia, siendo responsabilidad de los fondos privados brindar una completa, necesaria y transparente asesoría, lo que en el proceso quedó demostrado que no ocurrió. De otro lado, solicita que en virtud del principio de sostenibilidad financiera del sistema y en aras de evitar un detrimento patrimonial a la entidad, se le ordene al fondo privado devolver las cuotas de administración, pues además son dineros que permiten el fortalecimiento de su patrimonio con lo que se generaría un enriquecimiento sin causa. Cita como sustento las sentencias 31989 de 2008, SL 17595 de 2017, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019 y SL 1688 de 2019.

PORVENIR S.A. a su turno, solicita se revoque la sentencia al considerar que no le asiste razón al fallador de primera instancia, por cuanto en este asunto no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento con el cambio de régimen del demandante, pues no se alegó y menos probó ninguna de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación con esa entidad deba declararse eficaz. Agrega que el formulario de afiliación suscrito por el demandante, es un documento público que se presume auténtico según los arts. 243 y 244 del CGP y el parágrafo del art. 54A del CPT, que además contiene la declaración de que trata el artículo 114 de la 100 de 1993, esto es que la selección fue libre, espontánea y sin presiones. Insiste además en que en el presente asunto la parte demandante realizó cambio de régimen de forma libre y voluntaria, en el cual se le brindó una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación. Solicita finalmente que, en caso de considerar que el negocio jurídico celebrado entre las partes no tuvo validez, se tenga en cuenta el artículo 113, literal b) de la ley 100 de 1993 que

menciona cuáles son los dineros que se deben trasladar cuando existe el cambio de régimen, esto es, el saldo de la cuenta individual incluidos los rendimientos, lo que impide que legalmente se pueda ordenar la devolución de sumas diferentes a las referidas en esta norma como las cuotas de administración.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las demandadas PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a través de los recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES -en los temas que lo afectan- con el objeto de salvaguardar los intereses de la entidad, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor JORGE HERNÁN VALLEJO AGUDELO realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A., quedan en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** JORGE HERNÁN VALLEJO AGUDELO nació el 15 de enero de 1956 (fl. 52); **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el ISS y comenzó a realizar cotizaciones el 27 de octubre de 1975, acumulando en esa entidad un total de 660.57 semanas fl. 43; **(iii)** el 30 de junio de 1997 suscribió el formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A., con efectos desde el 1 de agosto de ese mismo año, fl. 31; **iv)** posteriormente se trasladó a la entonces AFP COLPATRIA S.A. hoy PORVENIR S.A., según formulario de vinculación del 24 de noviembre de 1998, fl 32; y **v)** finalmente se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A., según formulario del 25 de octubre de 1999, entidad en la que se encuentra afiliado actualmente - fl. 33.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por las AFP COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A., y PROTECCIÓN S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores de los fondos privados, dado que, al momento de tramitar el traslado, no tuvieron en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias*



*mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993

o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información al afiliado, al no suministrarle, *“en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen”* (SL 1689-2019).

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que

contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].”***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar la devolución de la totalidad de aportes recibidos, incluyendo conceptos como las cuotas de administración o comisiones, porcentaje destinado al fondo de

garantía de pensión mínima y seguros previsionales, tema cuestionado en los recursos de apelación de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., así como en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

*(...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la*

*encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*(...)*

*Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

*“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima*

*media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.*

*(...)*

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."*

En consecuencia, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA, incluida la orden a todas las entidades que tuvieron como afiliado al señor VALLEJO AGUDELO, para que procedan con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración o comisiones, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que aquel estuvo vinculado a cada entidad, las cuales son apenas exigibles con la declaratoria de ineficacia misma del traslado por lo que no puede hablarse de prescripción de ninguna clase.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., ordenando a cada una de ellas el pago por concepto de agencias en derecho la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día 4 de marzo de 2020.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., ordenando a cada una de ellas el pago por concepto de agencias en derecho la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 056  
del 7 de abril de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c274c12de9b1590faafc9f4593b5ef965eb23d46937112651cdd5f1c1d832852**

Documento generado en 06/04/2021 02:18:29 PM